



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Anteproyecto de Ley de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

I

El texto sometido a informe tiene por objeto la reforma del régimen regulador de las liquidaciones e ingresos de cuotas a la Seguridad Social, pasando a diferenciar el artículo 19 del Texto refundido, en la redacción dada por el Anteproyecto, tres sistemas de liquidación e ingreso, fundados algunos de ellos en la obtención por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social de determinados datos de que disponga en relación con los sujetos obligados o que sean facilitados por los responsables del cumplimiento de la obligación, como sucede en el caso del sistema de liquidación directa por la Tesorería, recogido en el apartado b). Asimismo, el artículo 26 del Texto refundido establecería el mecanismo de cumplimiento de las obligaciones en esta materia.

Desde el punto de vista de la aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal resultan relevantes los apartados nueve y diez del artículo primero del Anteproyecto.

El primero de ellos introduce en el Texto refundido un nuevo artículo 32 bis, a cuyo tenor “Las liquidaciones de cuotas calculadas mediante los sistemas a que se refiere el artículo 19.1 podrán ser objeto de comprobación por la Tesorería General de la Seguridad Social, requiriendo a tal efecto cuantos datos o documentos resulten precisos para ello. Las diferencias de cotización que pudieran resultar de dicha comprobación serán exigidas mediante reclamación de deuda o mediante acta de liquidación expedida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, conforme a lo previsto, respectivamente, en los artículos 30.1 y 31.1.b) de esta ley”.

Por su parte, el apartado diez del artículo primero modifica el artículo 36.6 del Texto refundido, incorporando ciertas especialidades en su párrafo primero, añadiendo un nuevo párrafo segundo y generalizando lo dispuesto en su párrafo tercero.



Así, conforme al párrafo primero del nuevo artículo 36.6 “La cesión de aquellos datos de carácter personal, objeto de tratamiento automatizado, que se deba efectuar a la Administración de la Seguridad Social conforme a lo dispuesto en este artículo o, en general, en cumplimiento del deber de colaborar para la efectiva liquidación y recaudación de los recursos de la Seguridad Social y de los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de la Seguridad Social, no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito, tampoco será de aplicación lo que, respecto a las Administraciones Públicas, establece el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”. De este modo, se amplía el deber de colaboración con la Seguridad Social no sólo al ejercicio de la función recaudatoria, sino también a la liquidación de las correspondientes cuotas.

En nuevo párrafo segundo añade una lista genérica de autoridades y administraciones públicas a las que se impone el meritado deber de colaboración, disponiendo que “a los efectos señalados en el párrafo anterior, las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales; los organismos autónomos, las agencias y las entidades públicas empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las mutualidades de previsión social; las demás entidades públicas y quienes, en general, ejerzan o colaboren en el ejercicio de funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración de la Seguridad Social cuantos datos, informes y antecedentes recabe ésta en el ejercicio de sus funciones liquidatorias y recaudatorias, mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos y a prestarle, a ella y a su personal, apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus competencias”.

Finalmente, frente a la exclusiva referencia a la Administración Tributaria efectuada en la redacción actual del precepto, el párrafo tercero del artículo 36.6 generaliza lo dispuesto en aquél, al indicar que “La cesión de datos a que se refiere este artículo se instrumentará preferentemente por medios electrónicos”.

Por razones de sistemática, el análisis contenido en el presente informe principiará con el relativo al artículo 36 del Texto Refundido, procediéndose posteriormente al estudio del artículo 32 bis.

## II

En todo caso, dado que ambos preceptos prevén la cesión a la Administración de la Seguridad Social y el posterior tratamiento por la misma de datos de carácter personal será preciso recordar a tal efecto que esta Agencia ha puesto reiteradamente de manifiesto que la mera adopción de una



norma con rango de Ley no puede considerarse por sí sola como habilitante de un tratamiento o cesión, sino que debería analizarse si la mencionada previsión propuesta resulta conforme y respetuosa con el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, consagrado por el artículo 18.4 de la Constitución. En este sentido, si bien es cierto que la Ley puede, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.1 y 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, establecer causas específicas legitimadoras del tratamiento de los datos de carácter personal sin que se haga preciso en tales supuestos recabar el consentimiento de los afectados, debe tenerse en cuenta que tales limitaciones deberán en todo caso resultar respetuosas con el contenido esencial del derecho fundamental, conforme exige el artículo 53.1 de la Constitución. Así lo ha puesto de relieve el Tribunal Constitucional en la Sentencia 17/2013, de 31 de enero, en cuyo fundamento jurídico 4 se señala lo siguiente

*“En conclusión, tal como establece nuestra doctrina, es claro que la LOPD no permite la comunicación indiscriminada de datos personales entre Administraciones Públicas dado que, además, estos datos están, en principio, afectos a finalidades concretas y predeterminadas que son las que motivaron su recogida y tratamiento. Por tanto, la cesión de datos entre Administraciones Públicas sin consentimiento del afectado, cuando se cedan para el ejercicio de competencias distintas o que versen sobre materias distintas de aquellas que motivaron su recogida, únicamente será posible, fuera de los supuestos expresamente previstos por la propia LOPD, si existe previsión legal expresa para ello [art. 11.2. a) en relación con el 6.1 LOPD] ya que, a tenor de lo dispuesto en el art. 53.1 CE, los límites al derecho a consentir la cesión de los datos a fines distintos para los que fueron recabados están sometidos a reserva de ley. Reserva legal que, como es obvio, habrá de cumplir con los restantes requisitos derivados de nuestra doctrina- esencialmente, basarse en bienes de dimensión constitucional y respetar las exigencias del principio de proporcionalidad- para poder considerar conforme con la Constitución la circunstancia de que la norma legal en cuestión no contemple, por tanto, la necesidad de contar con el consentimiento del afectado para autorizar la cesión de datos.”*

De este modo deberá verificarse si dicha habilitación resulta coherente con los principios de protección de datos y, particularmente, con los consagrados en el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999. En este sentido, el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”, añadiendo el artículo 4.2 que “los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”.



### III

Dicho lo anterior, en relación con la reforma del artículo 36 del Texto Refundido, como se ha venido indicando, el precepto ahora introducido por la reforma viene a reproducir lo dispuesto actualmente en el artículo 36.6 de aquél, si bien difiere del mismo en el sentido de extender el deber de colaboración a la transmisión de la información necesaria para la efectiva liquidación de los recursos de la seguridad social, incorporando asimismo un nuevo párrafo que se refiere al deber de colaboración de las autoridades y entidades de derecho público y generalizando la regla de que el intercambio de la información se llevará a cabo, predominantemente, a través de medios electrónicos.

La memoria de impacto normativo fundamenta las modificaciones señaladas indicando, en cuanto a la ampliación del deber de colaboración a las funciones relacionadas con la liquidación, que el texto “ha visto ampliado su contenido al objeto de que dicha cesión también se efectúe, en las mismas condiciones, en cumplimiento del deber de colaborar para la efectiva liquidación de los recursos de la Seguridad Social y de los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas del sistema, puesto que la aplicación del nuevo sistema para su liquidación directa requiere que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda disponer de toda la información necesaria para proceder a su cálculo dentro de cada periodo de liquidación, tanto la que obre en sus bases de datos como la que hayan de suministrarle otros organismos o autoridades, con independencia de los que deba aportar cada sujeto responsable”.

Por su parte, en cuanto a la referencia a las autoridades y entidades de derecho público, añade la Memoria que “en similares términos a los ya previstos por el artículo 94.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se ha añadido un nuevo segundo párrafo en dicho apartado 6 en el que se reseñan las autoridades que estarán sujetas al deber de información y colaboración con la Tesorería General en el ejercicio de sus funciones liquidatorias y recaudatorias”.

Respecto del intercambio de información a través de medios predominantemente electrónicos la Memoria se limita a mencionar esta modificación sin más referencias.

Pues bien, de la dicción de los párrafos primero y segundo del artículo 36.6 del Texto refundido en la redacción otorgada por el Anteproyecto sometido a informe así como la justificación contenida en la Memoria de Impacto Normativo del mismo, teniendo asimismo en cuenta lo señalado en el apartado anterior de este informe, cabe deducir que si bien la ampliación de la regla



general contenida en el párrafo primero del precepto puede considerarse justificada por la necesidad de obtención de los datos en el marco de las actuaciones de liquidación establecidas en el nuevo texto, la cláusula general de cesión incluida en el nuevo párrafo segundo del artículo 36.6 no resulta enteramente ajustada a los principios mencionados con anterioridad.

Como se ha venido señalando, la Memoria de Impacto Normativo del Anteproyecto señala que la inclusión de este segundo párrafo responde al establecimiento en el ámbito de las actuaciones de liquidación y recaudación de los recursos de la Seguridad Social de una regla similar a la que ya aparece recogida por el artículo 94.1 de la Ley General Tributaria y que fue objeto de informe favorable de esta Agencia en fecha 28 de mayo de 2003.

El citado artículo establece en su párrafo primero que “Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales; los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las mutualidades de previsión social; las demás entidades públicas, incluidas las gestoras de la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle, a ella y a sus agentes, apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones”.

Como puede comprobarse, existe una sustancial diferencia entre la norma ahora informada y la contenida en la Ley General Tributaria, cual es la relativa a la naturaleza de los datos que podrán ser objeto de cesión a la Administración Tributaria, lo que aparece directamente vinculado a la delimitación en el marco de dichas cesiones de los principios de proporcionalidad y finalidad.

En efecto, mientras que el artículo 94.1 de la Ley General Tributaria limita la cesión de los datos por las autoridades y entidades que enumera (y que se corresponden con las enumeradas en el Anteproyecto ahora informado) a “cuantos datos, informes y antecedentes *con trascendencia tributaria* recabe ésta”, la referencia a la naturaleza de los datos, informes o antecedentes desaparece por completo en el texto sometido a informe, que se limita a mencionar aquéllos que recabe la Administración de la Seguridad Social, limitándose a indicar que la información se recabará “en el ejercicio de sus funciones liquidatorias y recaudatorias”.

Ya se ha indicado que la vinculación de la cesión con el ejercicio de estas informaciones resulta justificada en el nuevo régimen establecido en el Anteproyecto sometido a informe; sin embargo, junto a la referencia a estos



procedimientos sería necesario que el Anteproyecto especificase con mayor detalle la delimitación de la naturaleza de los datos objeto de tratamiento.

Bien es cierto que la posible mención a la “trascendencia en materia de Seguridad Social de la información suministrada” podría resultar excesivamente ambigua. No obstante, sería posible delimitar la naturaleza de la información sin establecer un término similar al de la Ley General Tributaria, vinculando las informaciones suministradas con la propia finalidad de la actividad con la que se vincula el tratamiento de los datos que se llevará a cabo con posterioridad por parte de la Administración de la Seguridad Social.

Ello podría lograrse si se reemplazase la referencia a “cuantos datos, informes y antecedentes recabe ésta (la Seguridad Social) en el ejercicio de sus funciones liquidatorias y recaudatorias” por un mención de “cuantos datos, informes y antecedentes **precise ésta para el adecuado** ejercicio de sus funciones liquidatorias y recaudatorias”. Con ello se delimitaría claramente que la cesión de datos únicamente quedaría limitada a los que revistieran trascendencia para el ejercicio de dichas competencias de liquidación y recaudación, sin que se mantuviera la cláusula, excesivamente genérica, actualmente contenida en el párrafo segundo del artículo 36.6.

Al propio tiempo, sería conveniente que el artículo 36 se completase con un nuevo apartado, referido a la totalidad de los supuestos contemplados en el mismo y que complementaría lo ya dispuesto en el artículo 66 del Texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, clarificando que los datos obtenidos conforme a lo dispuesto en el artículo 36, en toda su extensión, no serán objeto de tratamiento para fines distintos de los de liquidación y recaudación que se han venido señalando.

Por este motivo, esta Agencia propone añadir un nuevo apartado 7 al artículo 36 del Texto Refundido, en la redacción dada por el Anteproyecto, que indicase lo siguiente:

**“Los datos que hubieran sido transmitidos conforme a lo dispuesto en este artículo únicamente serán tratados en el marco de las funciones de liquidación y recaudación atribuidas a la Administración de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66 de esta Ley.”**

Por otra parte, cabe hacer referencia a determinadas precisiones que sería conveniente introducir en el texto del artículo 36.6 en la versión propuesta por el Anteproyecto sometido a informe, a fin de clarificar en mayor medida su contenido.

En primer lugar, el párrafo primero del precepto se refiere al hecho de que los datos suministrados sean “objeto de tratamiento automatizado”. La



redacción mencionada puede traer su causa del momento en que se adoptó el Texto Refundido, en que se encontraba vigente la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, cuyo artículo 2.1 disponía que “La presente Ley será de aplicación a los datos de carácter personal que figuren en ficheros automatizados de los sectores público y privado y a toda modalidad de uso posterior, incluso no automatizado, de datos de carácter personal registrados en soporte físico susceptible de tratamiento automatizado”.

Sin embargo, la Ley Orgánica 15/1999 modificó, siguiendo lo establecido en la Directiva 95/46/CE, este ámbito de aplicación, de forma que el hecho de que el tratamiento fuese llevado a cabo automatizadamente dejó de resultar relevante para que la Ley desplegara sus efectos y quedase así adecuadamente garantizado el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Por este motivo, el artículo 2.1 de la Ley Orgánica establece, en su párrafo primero que “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”.

En consecuencia, las normas se aplican a los datos susceptibles de tratamiento y no a ese tratamiento, por lo que incluso en menor medida resulta relevante que el tratamiento sea o no automatizado.

Por este motivo, sería conveniente suprimir la expresión “objeto de tratamiento automatizado”, contenida en el artículo 36.6, párrafo primero, en la redacción establecida en el Anteproyecto.

En segundo lugar, el mismo párrafo primero establece en su último inciso que “en este ámbito, tampoco será de aplicación lo que, respecto a las Administraciones Públicas, establece el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.

Ciertamente, el artículo 21.1 establece una regla de limitación de los supuestos en que será posible la cesión de datos entre Administraciones Públicas, al disponer, en su actual redacción, que “los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos”.

Sin embargo, esta Agencia ha puesto de manifiesto, en reiteradas ocasiones, y la jurisprudencia así lo ha venido ratificando, que la disposición



contenida en el artículo 21.1 citado no es sino complementaria de la establecida en el artículo 11 de la Ley Orgánica, y en particular de la habilitación legal establecida en el artículo 11.2 a) como legitimadora de la cesión de datos de carácter personal sin contar con el consentimiento del interesado.

Quiere ello decir que el artículo 21.1 no constituye sino un supuesto de habilitación legal para la cesión de datos en el marco de la habilitación establecida por el propio artículo 11.2 a) de la Ley, que se configura como regla general. De este modo, en caso de que una norma con rango de Ley estableciera una habilitación para el tratamiento de datos, esa fundamentación sería siempre, y no sólo en casos como el contenido en el Anteproyecto, independiente del artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, que no es sino otro supuesto legal legitimador de la cesión de datos.

Por todo ello, entiende esta Agencia que la referencia contenida en el último inciso del párrafo primero del artículo 36.6, en la redacción propuesta por el Anteproyecto, aun siendo reiterativa de la actualmente vigente resulta contradictoria y equívoca, dado que podría ser interpretada en el sentido de que la Ley únicamente habilita una cesión de datos entre Administraciones Públicas en el supuesto en que se estableciese expresamente la exclusión de la aplicación del artículo 21.1 de la Ley Orgánica, cuando dicho requisito no tiene por qué concurrir al tratarse de dos supuestos legales habilitantes diferenciados.

De este modo, esta Agencia propone la siguiente redacción del artículo 36.6 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social:

**"6. La cesión de aquellos datos de carácter personal que se deba efectuar a la Administración de la Seguridad Social** conforme a lo dispuesto en este artículo o, en general, en cumplimiento del deber de colaborar para la efectiva liquidación y recaudación de los recursos de la Seguridad Social y de los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de la Seguridad Social, no requerirá el consentimiento del afectado.

A los efectos señalados en el párrafo anterior, las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales; los organismos autónomos, las agencias y las entidades públicas empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las mutualidades de previsión social; las demás entidades públicas y quienes, en general, ejerzan o colaboren en el ejercicio de funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración de la Seguridad Social cuantos datos, informes y antecedentes **precise ésta para el adecuado** ejercicio de sus funciones liquidatorias y





recaudatorias, mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos y a prestarle, a ella y a su personal, apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus competencias.

La cesión de datos a que se refiere este artículo se instrumentará preferentemente por medios electrónicos."

Por otra parte, a nuestro juicio, el Anteproyecto sometido a informe debería también introducir, además de la adición del apartado 7 del artículo 36 a la que se ha hecho referencia en un lugar anterior, ciertas modificaciones en el texto del apartado 4 del artículo 36 del Texto Refundido en su redacción actualmente vigente.

La primera de ellas derivaría de lo que se ha señalado con anterioridad en cuanto a la adaptación del Texto al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999. A tal efecto debería suprimirse la mención "objeto o no de tratamiento automatizado" incluida en el párrafo primero del apartado 4 del artículo 36.

La segunda se encuentra relacionada con la aplicación de los principios de finalidad y proporcionalidad a los que se ha hecho referencia con anterioridad, teniendo en cuenta la doctrina emanada del Tribunal Constitucional para considerar conforme a la constitución la existencia de una habilitación legal para la cesión de datos.

En este sentido, el artículo 36.4 del Texto refundido establece el deber de los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales de colaborar con la Administración de la Seguridad Social para suministrar a la misma toda clase de información "siempre que sea útil" para la recaudación de recursos de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta de que aquéllos dispongan.

A nuestro juicio, la aplicación del criterio de utilidad no resulta suficientemente ajustada a los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999. Debe recordarse que la ley limita el tratamiento a los datos "adecuados, pertinentes y no excesivos" para la finalidad que justifica ese tratamiento; es decir, a aquellos datos que resultan necesarios para el cumplimiento de ese fin. De este modo, el juicio de utilidad debería reemplazarse por otro de necesidad, reemplazando el término "útil" por "necesaria".

Por todo ello, considera esta Agencia que debería reformarse igualmente el párrafo primero del apartado 4 del artículo 36 del Texto Refundido, resultando el mismo el siguiente:

"Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, están obligados a colaborar con la Administración de la Seguridad Social para



suministrar **toda clase de información siempre que sea necesaria** para la recaudación de recursos de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta de que aquéllos dispongan, salvo que sea aplicable.”

#### IV

En cuanto a la introducción por el Anteproyecto de un nuevo artículo 32 bis al Texto Refundido, la misma traería causa de la atribución por el propio precepto a la Tesorería General de la Seguridad Social de competencias en materia de liquidación de los recursos, pudiendo a tal efecto, como el precepto indica, llevar a cabo funciones de comprobación de las autoliquidaciones o liquidaciones llevadas a cabo.

En este sentido, la Memoria de Impacto Normativo clarifica esta competencia en los siguientes términos:

*“A mayor abundamiento, se ha resaltado que deben distinguirse dos fases dentro del nuevo sistema de liquidación directa de cuotas:*

*- La primera se produce dentro del plazo reglamentario de un mes para la liquidación e ingreso de las cuotas. En esta fase la Tesorería General de la Seguridad Social puede realizar todas las comprobaciones que considere necesarias para la correcta liquidación de las cuotas, de ahí que se la faculte para recabar cuantos datos o documentos precise para ello y sin que proceda actuación alguna por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, salvo que así lo solicite el citado servicio común de la Seguridad Social.*

*- La segunda se produce una vez transcurrido el plazo reglamentario para la liquidación e ingreso de las cuotas, respecto al cual el nuevo artículo 32 bis de la LGSS alude a que podrá emitir las correspondientes reclamaciones de deuda “por las diferencias de cotización que resulten de dicha comprobación, conforme a lo previsto en el artículo 30.1”.*

*Por tanto, las comprobaciones que la Tesorería General pueda efectuar en esta fase se refieren exclusivamente a las permitidas por el artículo 30.1 de la LGSS, consistentes en la falta de cotización respecto de trabajadores dados de alta (bien por no haber cumplido las obligaciones establecidas en su artículo 26.1 o bien cuando, habiéndose cumplido, los documentos de cotización presentados o las liquidaciones o datos transmitidos contengan errores materiales, aritméticos o de cálculo que resulten directamente de los mismos) o en las diferencias de importe entre las cuotas ingresadas y las que legalmente corresponda*



*liquidar (debidas también a errores materiales, aritméticos o de cálculo que resulten directamente de las liquidaciones presentadas o de los datos transmitidos)."*

Por otra parte, es preciso clarificar que, toda vez que el artículo 36.6 del Texto Refundido, en la redacción dada al mismo por el Anteproyecto ya hace referencia a los supuestos de cesión de datos por parte de las entidades financieras, los funcionarios públicos, los profesionales oficiales y las autoridades en el desempeño de sus cargos, la cesión regulada por el artículo 32 bis se refiere a la que habrán de llevar acabo los propios obligados, de forma que se impone a aquellos la obligación de comunicar los datos o documentos que sean precisos para la comprobación de las liquidaciones de cuotas llevadas a cabo conforme a los sistemas establecidos en el artículo 19.1 en su nueva redacción.

Obviamente no corresponde a esta Agencia efectuar valoración alguna en relación con la distribución competencial efectuada por el Anteproyecto, debiendo únicamente concluir que otorgada dicha competencia a la Tesorería General de la Seguridad Social, la obtención de datos procedentes de los obligados en los términos descritos en el precepto, en cuanto sean precisos para la comprobación de las liquidaciones resulta ajustada al ejercicio de las competencias establecidas en el Proyecto, por lo que no procede efectuar objeción alguna al contenido del precepto.

## V

En su virtud, esta Agencia considera que debería procederse a la modificación del texto del Anteproyecto sometido a informe en el sentido de incluir las observaciones contenidas en este informe en relación con la nueva redacción dada al artículo 36.6 del Texto refundido por el artículo diez del artículo primero del texto sometido a informe e introduciendo asimismo dos nuevos apartados a ese artículo primero con el fin de modificar el apartado 4 del artículo 36 del Texto Refundido y añadir un nuevo apartado 7 a dicho artículo 36.